



**UNIVERSIDAD FERMIN TORO**  
**VICE RECTORADO ACADEMICO**  
**DECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO**  
**ESPECIALIZACION EN DERECHO PROCESAL PENAL**

## PROGRAMA INSTRUCCIONAL

Nombre de la asignatura:				Código	Trimestre	U.C.	Pre - Requisito
EFFECTOS ECONOMICOS DEL PROCESO				EEP-106		3	S/P
<b>Tipo de Asignatura:</b>	Nivelatoria	Obligatoria	Electiva	<b>DENSIDAD HORARIA</b>			
				H.T	H.P/H.L	H.A	THS/Trim
							48
<b>Profesores especialistas:</b>				<b>Elaborado por:</b>			
DRA. MARY CARRIZO DE RAGUSSO				DRA. MARY CARRIZO DE RAGUSSO			
<b>Fecha de elaboración</b>	<b>Revisado por</b>			<b>AUTORIZADO POR VICE RECTORADO ACADÉMICO</b>			
	<b>UNIDAD CURRICULAR</b>	<b>DECANATO</b>		<b>(FIRMA Y SELLO)</b>			
<b>Fecha de última revisión</b>							
MAYO, 2008							

## FUNDAMENTACIÓN

Con frecuencia, cuando estamos estudiando la posibilidad de acudir a los tribunales, nuestro abogado nos advierte de la posibilidad de que si perdemos el pleito, el juez nos condene “en costas”, o por el contrario, nos anima a entablar acciones, pues sin ganamos, el juez condenará al contrario a pagar nuestras “costas”.

Pues bien, conviene tener claro exactamente a qué se refieren y qué cubren las costas judiciales, pues algunas veces su impacto económico es casi tan importante como el del pleito en sí.

Así, tienen la consideración de costas ciertos gastos que se originan durante la tramitación de un procedimiento judicial, exclusivamente por los siguientes conceptos:

- Los honorarios del Abogado y derechos del Procurador, cuando su intervención es obligatoria.
- La inserción de anuncios o edictos que obligatoriamente deban publicarse durante la tramitación del procedimiento.
- Los honorarios de los peritos.
- Las copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos que se soliciten a los Registros Públicos, salvo que las solicite directamente el juzgado, en cuyo caso, serán gratuitos.
- Los derechos arancelarios (gastos de notario)

En principio, cada parte debe abonar los gastos que vaya generando la defensa de sus intereses en el juicio. Será la sentencia que ponga el fin al procedimiento la que imponga al perdedor, la obligación de abonar al vencedor las costas que le ha originado la tramitación del procedimiento, o lo que es lo mismo, la condena en costas se contiene en la sentencia y debe abonarlas el que pierde el juicio.

En ocasiones las sentencias pueden contener una expresión similar a “sin hacer especial pronunciamiento en costas” o bien, “cada parte abonará las costas causadas a su instancia”, lo que significa que cada parte asumirá sus propios gastos independientemente que haya ganado o no el pleito.

Los juzgados no suelen condenar en costas en los procedimientos de familia (separación, divorcio, modificación de medidas... etc.) ni en los laborales.

Si bien el artículo 277 del COPP consagra que el Estado será condenado en costas cuando el imputado resulte absuelto, guarda silencio en cuanto al órgano estatal que debe soportar tal erogación, razón por la cual se hace necesario acudir a la vía de la interpretación para resolver tal interrogante. Sobre el particular, se observa lo siguiente: Como se evidencia de las normas que regulan el proceso penal, el Ministerio Público -en nombre del Estado- ostenta la titularidad de la acción penal, es decir, que es el órgano encargado de intervenir, por medio de sus funcionarios, en todos los procesos a los cuales está llamado por ley. El Ministerio Público forma parte del Poder Ciudadano y como tal es independiente de las demás ramas del Poder Público Nacional; goza de autonomía funcional, administrativa, financiera y, por ende, presupuestaria (artículo 273 Constitucional). Así lo reitera el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, al señalar: "El Ministerio Público es autónomo e independiente de los demás órganos del Poder Público y en consecuencia, no podrá ser impedido ni coartado en el ejercicio de sus funciones por ninguna otra autoridad".

Por otra parte, el artículo 10 ejusdem consagra lo siguiente: "El Fiscal General de la República, sin perjuicio de las atribuciones del Procurador General de la República, podrá designar representantes ante cualquier tribunal, para sostener los derechos e intereses del Ministerio Público en los juicios con ocasión de su actos..."

Es de hacer notar que en ese caso en particular, opera el supuesto previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, del tenor siguiente: "El Procurador General de la República, conservará en toda su plenitud la representación de los intereses patrimoniales de la República aun en los casos en que legalmente existan otro u otros funcionarios investidos de ella y aun cuando el mismo Procurador sea quien, conforme a la ley, la haya sustituido". Con base en lo expuesto, se considera que el Ministerio Público, por mandato legal expreso y sin menoscabo de la intervención voluntaria de la Procuraduría General de la República, al actuar en nombre de la República, es competente para defender los intereses patrimoniales de ésta que pudieran verse afectados en el curso de los procesos penales y, en consecuencia, es el órgano que debe ser notificado en los casos de condenatoria en costas, pues es quien ejerce -en nombre del Estado- la acción penal y, por tanto, debe asumir las consecuencias que se deriven de la actuación de sus representantes en dichos procesos. A tales fines y teniendo en consideración que en materia presupuestaria rige el principio de legalidad del gasto público, es decir, que todos los gastos deben estar previstos en la Ley de Presupuesto anual, se estima que -de mantenerse vigente el artículo 277 del COPP- dentro del presupuesto del Ministerio Público debería incluirse una partida especial destinada al eventual pago de las costas que sean imputadas al Estado como consecuencia de las actuaciones que ese Organismo realice en su nombre. En virtud de ello, por razones de seguridad jurídica, sería recomendable que en la reforma del COPP que adelanta la Asamblea Nacional -de estimarse que el Estado sí debe ser condenado en costas, se incluyan las disposiciones necesarias para aclarar la situación actual respecto al órgano que debe asumir el pago de las costas en nombre del Estado.

Por otra parte, debe resaltarse que, en un criterio particular, la Procuraduría General de la República, no obstante debe ser la representante nata de los intereses patrimoniales de la República, no debería ser notificada al respecto, por lo siguiente:

- 1) Por mandato constitucional, el Ministerio Público es el órgano encargado de ejercer la acción penal en nombre del Estado y, como tal, debe intervenir en todas las fases del proceso y soportar las consecuencias que del mismo se derivan.
- 2) La Ley Orgánica del Ministerio Público expresamente lo faculta para defender sus intereses patrimoniales -que en definitiva son los de la República- en los juicios con ocasión de sus actos.
- 3) Se trata de acciones penales que escapan del ámbito de competencias que constitucional y legalmente tiene atribuidas la Procuraduría General de la República.
- 4) La posible afectación patrimonial de los intereses de la República deriva del proceso penal mismo y tiene lugar una vez que se ha dictado la sentencia absolutoria, es decir, que es una consecuencia indisoluble de aquél.
- 5) De aceptarse que la Procuraduría General de la República debe asumir la representación de los intereses patrimoniales de la República que se derivan de los juicios penales, conduciría al absurdo de sostener que este Organismo debe intervenir en todo el curso del proceso penal para lograr una efectiva y real defensa de los mismos, lo cual podría interpretarse como inconstitucional, pues existe otro órgano del Estado que tiene atribuida la titularidad de la acción penal en su nombre, cual es el Ministerio Público.
- 6) Presupuestariamente no existe ningún órgano del Poder Ejecutivo Nacional que pudiera justificar la erogación por concepto de pago de costas procesales derivadas de los procesos penales, pues el órgano que actúa en nombre del Estado es el Ministerio Público, que forma parte de otra rama del Poder Público y, por tanto, es independiente de los demás órganos y goza de autonomía presupuestaria. En especial, si se tiene en consideración la naturaleza del gasto, es decir, las costas, entendidas como "los gastos procesales, los que aparecen del proceso mismo y son consecuencia necesaria de él".

## **OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA**

Determinar la importancia de los efectos económicos dentro del proceso penal venezolano.

UNIDAD I		OBJETIVO TERMINAL	
LAS COSTAS EN EL PROCESO PENAL		ESTABLECER LA IMPORTANCIA QUE TIENEN LAS COSTAS EN EL PROCESO PENAL.	
DURACION			
16 HORAS			
EVALUACION			
20%			
OBJETIVOS ESPECIFICOS	CONTENIDO	ESTRATEGIAS DE INSTRUCCION	
1. Analizar el contenido de las costas y su imposición en el proceso penal venezolano.	<ul style="list-style-type: none"><li>Los gastos originados durante la tramitación del proceso tales como el importe del papel sellado, timbres y otros que corresponda por la actuación judicial;</li><li>Los honorarios de los abogados, peritos, consultores técnicos, traductores e intérpretes; y,</li><li>La remuneración de los jueces ciudadanos, la que será imputada a favor del Estado.</li><li>Sentencia Constitucional 0175/2007-R Sucre, 23 de marzo de 2007.</li><li>Imposición de las costas en el proceso. (Art. 265 C.O.P.P.)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Método Expositivo:</li><li>Presentación motivada por parte del docente.</li><li>Exposición del tema a tratar. Intercambio de ideas. Control de lecturas.</li></ul>	
ESTRATEGIAS DE EVALUACION:			
<ul style="list-style-type: none"><li>Prueba Escrita .</li><li>Informe.</li></ul>			

UNIDAD II		OBJETIVO TERMINAL	
IMPOSICION DE COSTAS AL IMPUTADO Y AL ESTADO.		DESARROLLAR LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LAS COSTAS TANTO AL ESTADO COMO AL IMPUTADO.	
DURACION			
8 HORAS			
EVALUACION			
30%			
OBJETIVOS ESPECIFICOS	CONTENIDO	ESTRATEGIAS DE INSTRUCCION	
1. Describir las cuales son los efectos positivos y negativos de la imposición de costas al Estado y al Imputado. 2. Analizar las secuelas de una denuncia falsa o temeraria con respecto a las costas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Imposición de costas al Estado.</li><li>• Imposición de costas al Imputado.</li><li>• Denuncia falsa o Temeraria.</li><li>• Los incidentes en las costas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Método expositivo mixto:</li><li>• Presentación del tema por parte del docente.</li><li>• Organización de equipos de trabajo, y organización de lecturas.</li><li>• Exposición de temática.</li><li>• Cierre por parte del facilitador.</li></ul>	
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Informe.</li><li>• Exposición y Defensa.</li></ul>			

UNIDAD III		OBJETIVO TERMINAL	
ACCIONES QUE TOMA EL JUEZ O TRIBUNAL RESPECTO A LAS COSTAS PROCESALES.		CONCIENTIZAR A LOS PARTICIPANTES SOBRE LAS ACCIONES QUE TOMA EL JUEZ O TRIBUNAL RESPECTO A LA RESOLUCIÓN.	
DURACION			
16 HORAS			
EVALUACION			
30%			
OBJETIVOS ESPECIFICOS	CONTENIDO	ESTRATEGIAS DE INSTRUCCION	
1. Analizar las derivaciones de las costas cuando el Recurso no prospera o es desistido.	<ul style="list-style-type: none"><li>La Acción Privada y las costas.</li><li>La resolución por parte del Juez o tribunal en la aplicación de las costas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Estrategia cooperativa:</li><li>Método expositivo mixto.</li><li>Presentación motivadora por parte del docente.</li><li>Organización de equipos de trabajo a fin de realizar lecturas reflexivas. Participación del estudiante a través de lluvias de ideas. Realimentación por parte del docente.</li></ul>	
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:			
<ul style="list-style-type: none"><li>Exposición.</li><li>Ejercicios.</li></ul>			

UNIDAD IV		OBJETIVO TERMINAL	
LIQUIDACION Y EJECUCION DE LAS COSTAS PROCESALES.		CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACION, EJECUCION Y SOLICITUD DEL BENEFICIO DE GRATUIDAD DE LAS COSTAS.	
DURACION			
8 HORAS			
EVALUACION			
20%			
OBJETIVOS ESPECIFICOS	CONTENIDO	ESTRATEGIAS DE INSTRUCCIÓN	
1. Describir el procedimiento de liquidación y ejecución de las costas. 2. Analizar las causas para solicitar la gratuidad de las costas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Liquidación y ejecución de las costas.</li><li>• Solicitud del beneficio de gratuidad de las costas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Discusión grupal.</li><li>• Presentación motivada del tema por parte del facilitador.</li><li>• Redacción de informes.</li><li>• Discusión de informes.</li><li>• Verificación del aprendizaje.</li></ul>	
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Entrega de trabajo en grupo.</li></ul>			

## BIBLIOGRAFÍA

- Alcácer Guirao Rafael. **Los fines del derecho penal: una aproximación desde la filosofía política**. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2004.
- Arcaya de Landáez Nelly. **Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal, principios y garantías procesales**. 2da edición. 2002
- Binder Alberto. **Introducción al Derecho Procesal Penal**. Buenos Aires Argentina. 1993.
- Cafferata Nores José. **Proceso Penal y Derechos Humanos**. Buenos Aires – Argentina.
- Código de Procedimiento Civil**. Gaceta Oficial Nº 4.209. 1990
- Código Orgánico Procesal Penal**. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.536. (Extraordinaria). 2006.
- Cubas Villanueva Víctor. **Las Garantías Constitucionales del Proceso Penal, en APECC Revista de Derecho**. Año I. Nº 1. Lima – Perú. 2004.
- Díaz de León Marco Antonio. **Historia del derecho penal y procesal penal mexicanos**. Prólogo de Víctor Humberto Benítez Treviño. México D.F. Porrúa 2005.
- Ferrajoli Luigi **Justicia Penal y Democracia en el contexto extraprocesal**. Capítulo Criminológico Nº 16. Instituto de Criminología de la Universidad de Zulia. Maracaibo – Venezuela. 1990.
- González Samuel et al. **El sistema de justicia penal y su reforma: teoría y práctica**. Prólogo de Sergio García Ramírez. México. Fontamara. 2006.
- Maier Julio. **Derecho Procesal Penal Argentino**. Ed. Hammurabi. Buenos Aires – Argentina. 1989.
- Marín Vásquez Ramiro Alonso. **Sistema Acusatorio y Prueba (Revista temas Procesales)**. Edición Especial. julio de 2004.
- Mújica Araque Carlos Alberto. **El Principio de Oportunidad (Revista temas Procesales)**. Edición especial julio de 2004.
- Peña Alemán Tulia Guadalupe. **El Acta del debate como garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva en el proceso penal venezolano**. Editorial: Tribunal Supremo de Justicia. Venezuela. Año: 2003.